

VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

“Devaluacionistas y dolarizadores. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001”.

Ana Gabriela Castellani, Mariano Szkolnik.

Cita:

Ana Gabriela Castellani, Mariano Szkolnik (2004). *“Devaluacionistas y dolarizadores. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001”*. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-045/172>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Título de la ponencia: ***“Devaluacionistas y dolarizadores. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001”***

Autores:

Ana Gabriela Castellani (Facultad de Ciencias Sociales. UBA)

anacast@infovia.com.ar

Mariano Szkolnik (Facultad de Ciencias Sociales. UBA)

szunkov@yahoo.com.ar

Introducción

En la consideración de amplios sectores de la sociedad argentina, el principal logro del modelo económico basado en la convertibilidad, se hallaba en el hecho de haber conseguido mantener el valor del dólar a resguardo de los espasmódicos movimientos a los que había estado expuesto en el pasado. En un país con una historia económica marcada por la fuerte incidencia del valor del tipo de cambio en la variación general de los precios, el anclaje del peso a la moneda norteamericana fue presentado por el equipo económico como la única política capaz de posibilitar el sostenimiento de un régimen de baja inflación. Quienes habían puesto en marcha el Plan de Convertibilidad argumentaban que, de esa manera, se había inaugurado un periodo en la historia argentina que se extendería por décadas, el cual estaría caracterizado por la estabilidad indefinida de la economía. Bajo esa nueva condición, ésta se tornaría atractiva al ingreso de los capitales los cuales, una vez invertidos, contribuirían a incrementar la riqueza nacional y el bienestar de la población en general. ¹

¹ *“Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo seis décadas de estabilidad y de progreso equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30’. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del*

Tan inusitada decisión en materia de política económica logró imponerse por el alto nivel de consenso que alcanzó la interpretación que, sobre las causas de la crisis hiperinflacionaria de fines de los años ochenta, habían construido los sectores dominantes; es decir, aquélla que le atribuía la responsabilidad de la “debacle” a la incapacidad del Estado “populista” para controlar los principales resortes de la actividad económica.²

En efecto, ante el “sin sentido” social que trajeron aparejados la crisis estructural de las empresas públicas y la estampida de los precios que acompañaba la carrera del dólar, una medida tan cara al sentido común como referir el valor del peso al de una moneda de probada solidez internacional contó, desde un principio, con un fuerte y extendido consenso social. Quedaba fuera de la consideración general el interrogante referido a cómo se sostendría la paridad cambiaria o cómo afectaría el congelamiento de este precio relativo a la economía en su conjunto o, más específicamente, cómo impactaría el nuevo esquema sobre los sectores de la producción. La Convertibilidad logró, así, aglutinar un inédito consenso social, sustentado en el imaginario construido en torno de las ideas de *estabilidad monetaria y modernización económica*. Tal fue la fuerza de este consenso que, aún cuando las bases sobre las cuales se asentaba el modelo (el ingreso de capitales externos vía endeudamiento, especulación o inversión directa) se habían debilitado profundamente, pocas fueron las voces que, tras la recesión iniciada en 1998, pusieron en cuestión su continuidad. Sin embargo, el respirador del anclaje al dólar iba convirtiéndose aceleradamente en un lastre difícil de sobrellevar para la economía en su conjunto, que reclamaba reformas inmediatas.

30” (Domingo Cavallo, abril de 1991. Transcripción de audio del CD “*Los sonidos de la democracia, 1983-1998*”, editado por la revista *Tres Puntos*, Bs. As, 1998)

² El análisis sobre el rol de los sectores dominantes en la interpretación de la crisis hiperinflacionaria fue elaborado inicialmente en Basualdo (1999) y analizado en profundidad en Levit y Ortiz (1999).

A partir de 1999 resultó claro que, aún con fuertes apoyos, el régimen de convertibilidad tenía los días contados. A la par del agotamiento de la base material de sustentación del modelo señalada precedentemente, aquellas fracciones de la clase dominante que se veían “perjudicadas” por el atraso cambiario en un contexto de apertura (en especial, los industriales exportadores que competían en el mercado internacional con sus pares brasileros), comenzaron a esgrimir en la arena pública (a través de sus voceros corporativos) diversos argumentos para justificar una devaluación encubierta que permitiera mejorar el nivel de competitividad de la economía argentina. Por otro lado, las fracciones más beneficiadas por el modelo convertible (el sector bancario y financiero, las empresas privatizadas y las grandes firmas extranjeras que habían adquirido activos fijos durante el último lustro de la década del noventa) proponían (por la boca de “prestigiosos” economistas y algunos de los principales funcionarios de gobierno), la profundización del esquema convertible, es decir la dolarización de la economía.

Ya en ese entonces, se publicaron algunos trabajos que se ocuparon de señalar con precisión cuáles serían los sectores que se verían más beneficiados si se implementaba alguna de estas dos propuestas. En ellos, también se llamaba la atención sobre el terrible perjuicio que, para el conjunto de los asalariados, implicaría la implementación de cualquiera de los proyectos que se habían puesto en juego públicamente; pero lo más interesante es que, en esas investigaciones se advertía sobre el hecho de que nuevamente eran los sectores económicamente dominantes los que fijaban los márgenes dentro de los cuales debían discutirse las alternativas al modelo económico vigente.³

³ Al respecto consultar Basualdo (2000) y Schorr (2001). Un primer intento de conciliar elementos de análisis económico y sociológico en la interpretación del fin de la convertibilidad se encuentra en Castellani y Schorr (2003).

En la perspectiva sostenida por el presente trabajo se recuperan estos aportes, considerando que *los discursos contruidos en torno de los proyectos devaluador y dolarizador deben leerse como la exteriorización de las disputas al interior del bloque dominante en el momento en que el modelo de la convertibilidad entraba en su fase final.*⁴ Es por esta razón que se pretende contribuir con la línea de interpretación mencionada, realizando un análisis de las estrategias desplegadas por los principales actores involucrados en la construcción social de ambos proyectos, con la intención de echar luz sobre algunas cuestiones relevantes y poco exploradas hasta el presente: ¿qué actores impulsaron cada uno de los proyectos? ¿estos actores eran los que representaban tradicionalmente en el país los intereses de los sectores beneficiados con cada propuesta? ¿qué arcos de solidaridad y de enfrentamiento se fueron construyendo en cada coyuntura? ¿cuáles fueron las principales líneas de argumentación que se esgrimieron en cada momento?⁵

Para responder estas cuestiones, la investigación empírica se centró en la búsqueda, sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias.⁶ La presentación de los resultados se divide en dos partes, una para el análisis de cada propuesta y otra para el análisis de los principales actores involucrados. La intención es presentar conjuntamente, para cada caso, un análisis cronológico de las diversas lógicas de acción colectiva desplegadas por los actores que participaron en la construcción de cada propuesta y análisis de los principales

⁴ Debe recalcar que, si bien dichas argumentaciones -emitidas en forma aislada, o articuladas en una estrategia colectiva- no necesariamente precipitan la caída de un plan económico o del gobierno que lo sostiene, contribuyen a generar las condiciones para que los consensos establecidos puedan comenzar a ser cuestionados aunque no puedan ser sustituidos en lo inmediato

⁵ Recientemente se ha publicado un trabajo que analiza el rol de la UIA en la implementación del proyecto devaluacionista (Gaggero y Wainer: 2004) pero hasta, el momento, no existen trabajos que analicen específicamente el proceso de construcción social de ambas propuestas.

⁶ Fundamentalmente: diario Clarín, las revistas Mercado y Prensa Económica, documentos de las corporaciones empresarias y de los principales centros académicos de la ortodoxia liberal. En el trabajo de búsqueda y sistematización se contó con la valiosa colaboración de Laura Vennera, alumna de la Carrera de Sociología de la UBA.

argumentos que se utilizaron para apoyar o criticar a cada uno de los proyectos. Finalmente, se elaboran una serie de conclusiones a la luz de los hallazgos presentados.

I- La construcción social de las alternativas: dolarización vs devaluación

La devaluación de la moneda brasileña, en enero de 1999, fue el detonante que disparó y colocó en primer plano la discusión pública sobre el futuro del régimen de convertibilidad. A ningún observador se le podía escapar entonces, que la modificación del tipo de cambio y, por consiguiente, el incremento inmediato de la competitividad de la economía brasileña, ponía en jaque la precaria situación de la economía argentina que, en 1998, había entrado en una persistente fase recesiva.

Fue en ese contexto en el que comenzó a resquebrajarse el denominado “Consenso de la Convertibilidad” y tomaron estado público las alternativas propuestas por los sectores dominantes. Ahora bien, cada una de estas estrategias siguió derroteros muy diferentes. La *propuesta dolarizadora* se hizo pública por boca de los principales funcionarios del gobierno menemista (incluyendo al propio Carlos Menem, que fue su impulsor más importante) y los economistas más respetados del *establishment* (en su mayoría, pertenecientes al CEMA) y, sólo en raras ocasiones, contó con el apoyo explícito de sus potenciales beneficiarios.⁷ De hecho, fue una propuesta que sufrió vaivenes significativos a lo largo de todo el trienio: adquirió notoriedad e impulso durante el primer semestre del año 1999, perdió espacio en la discusión pública durante el resto de ese año y

⁷ Recién hacia fines de diciembre del 2001, cuando la salida de la convertibilidad se hacía cada vez más inevitable, varias empresas extranjeras expresaron públicamente su total oposición a una posible devaluación Clarín, 28-12-01.

durante todo el 2000, y volvió a instalarse como una alternativa, incluso barajada por el propio gobierno de la Alianza, en los agitados meses que van desde octubre de 2001 hasta la caída del presidente De la Rúa. Sin embargo, es necesario señalar que en esta etapa final del modelo, la dolarización aparecía más como un intento de “generar confianza” entre los grandes agentes económicos y la ciudadanía en su conjunto (mostrando que, en última instancia, para el gobierno era preferible perder la moneda nacional antes que devaluarla), que como una propuesta factible de ser implementada (por lo menos sin el apoyo de los EE.UU) ya que, sin considerar otras restricciones de orden político, no se contaba con las divisas suficientes para garantizar la dolarización de la masa circulante en pesos.

Por el contrario, la *propuesta devaluacionista* se mantuvo vigente durante todo el período de análisis, impulsada por las corporaciones empresarias representativas de los sectores interesados en modificar la paridad cambiaria (agrupadas en el autodenominado Grupo Productivo), que logró crear un amplio arco de solidaridades que incluía a diversos líderes sindicales y a varios políticos de los principales partidos, utilizando un remanido recurso ideológico: presentar la propuesta propia como un beneficio para toda la nación (en especial, para los sectores vinculados a la producción) en oposición a los sectores “foráneos y/o improductivos”. Igualmente, teniendo en cuenta las estrategias desplegadas, es importante señalar dos cuestiones: a) los devaluacionistas evitaron sistemáticamente mencionar la palabra devaluación; siempre utilizaron otras expresiones, tales como: “mejorar la competitividad”, “corregir el atraso cambiario”, “sostener la producción”, entre otros eufemismos⁸, dándole a la

⁸ El único que planteó en forma explícita y pública la salida de la Convertibilidad por la vía devaluatoria fue el líder de la CGT disidente, Hugo Moyano, tal como consta en el diario Clarín de fecha de 18 de enero de 2000.

propuesta un carácter *velado*; y b) hacia fines del 2001, el pedido (cada vez menos) encubierto de devaluación comenzó a ir de la mano de una propuesta de pesificación de las deudas contraídas en dólares, medida que se aplicó para todas las deudas en febrero del 2002, luego de una fuerte ofensiva llevada adelante por estos mismos actores.⁹

Ahora bien, más allá de esta visión general, es necesario reconstruir con mayor detalle cada uno de los proyectos elaborados en el seno de los sectores dominantes, prestando especial atención a las alianzas sociales que se tejieron en torno a cada uno y a las principales estrategias de acción (incluyendo las discursivas) que utilizaron los actores involucrados.

1.1 La estrategia dolarizadora: cómo llevar la convertibilidad al extremo

Como se mencionó anteriormente, en la construcción del *proyecto dolarizador* se pueden detectar tres grandes etapas: la primera, de notable impulso, entre enero y junio de 1999; la segunda, de relativo acallamiento, entre julio de 1999 y septiembre de 2001; y la tercera, donde vuelve a recobrar notoriedad, desde octubre hasta diciembre de ese mismo año.

En su primera etapa, el proyecto surgió de la mano del propio presidente Carlos Menem que lanzó la propuesta en una reunión de Gabinete Nacional tras la devaluación del real.¹⁰ Junto al presidente, se posicionaron en defensa de la dolarización los principales economistas ortodoxos, varios de ellos funcionarios de gobierno y miembros del CEMA, entre los cuales ocuparon un lugar destacado, el

⁹ Inicialmente, en enero del 2002, la pesificación fue decretada para las deudas contraídas en dólares por montos de hasta cien mil pesos. Luego de una feroz ofensiva de las principales corporaciones empresarias y diversos grupos económicos, se extensión hacia todas las deudas. Sobre los beneficios que le deparó a las grandes empresas esta medida, consultar el excelente trabajo de Lozano y Schorr (2002).

¹⁰ Reunión realizada el 14 de enero de 1999.

presidente del Banco Central, Pedro Pou, y el ministro de economía, Roque Fernández.¹¹ Las principales estrategias discursivas se centraron en *argumentos técnicos*, propios del saber “experto” de los economistas que procuraban explicar al resto de la sociedad, la necesidad de “eliminar la incertidumbre cambiaria”, situación que llevaría -casi de inmediato, según la visión de sus defensores- a un descenso de la tasa de interés y, por ende, a un aumento de la inversión y de la oferta de puestos de trabajo.¹² En menor medida, los funcionarios del gobierno menemista utilizaron *argumentos estratégicos*, vinculados a la conveniencia de seguir la tendencia mundial hacia la regionalización monetaria, teóricamente integrada por tres áreas de influencia: la del dólar, la del euro y la del yen. Por otra parte, el arco opositor se conformó con varios y heterogéneos actores: los economistas más o menos heterodoxos como Aldo Ferrer, Jose Luis Machinea, Remes Lenicov y Aldo Buscaglia, que contrargumentaron con la misma estrategia de sus colegas dolarizadores, apelando a *argumentos de orden técnico* resaltando las desventajas macroeconómicas que podría generar la adopción de la moneda norteamericana; líderes políticos tradicionales de la UCR, como Raúl Alfonsín y Rodolfo Terragno, que centraron sus críticas en *argumentos de orden político* (por ejemplo, la pérdida de la soberanía nacional) y *jurídicos* (imposibilidad institucional de implementar la dolarización por inconstitucionalidad); y diversos miembros del gobierno de Brasil, que alertaron sobre la segura desarticulación del Mercosur si se concretaba la propuesta, apelando a cuestionen de índole *estratégico-regional*.¹³

¹¹ Otros economistas que se mostraron favorables a la propuesta dolarizadora, fueron Pablo Guidotti (vice ministro de Economía; Guillermo Calvo (prestigioso economista del BID, Martín Lagos (vicepresidente del BCRA) y Jorge Castro (secretario de Planeamiento Estratégico en el gabinete de Roque Fernández).

¹² Diversas declaraciones publicadas en los medios gráficos confirman estas apreciaciones. Entre otras, ver Clarín, 23 y 24-01-99.

¹³ Precisamente, se trata del presidente del Banco Central de Brasil, Francisco “Chico” López, el propio canciller Luiz Lampraia y el economista Carlos Langani, de la fundación Getulio Vargas, que llegó a

Llamativamente, el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde (que luego se convertiría en un férreo opositor del proyecto dolarizador), manifestó un tibio apoyo a esta alternativa, adhiriendo a los argumentos “generadores de confianza” esgrimidos por sus principales impulsores, al sostener que la dolarización constituía una fuerte señal de que “se va a defender en serio la estabilidad.”¹⁴

Ahora bien, el escenario de confrontación local se complejizó cuando, a mediados de marzo de 1999, el FMI publicó un documento que proponía la dolarización, aunque sólo para aquellas economías castigadas por procesos inflacionarios. Si bien la Argentina no se encontraba en ese grupo, el documento hizo que se incorporaran al debate sobre la dolarización diversos miembros del gobierno de los Estados Unidos y del FMI, y académicos de algunas de las principales universidades del Norte, generalmente con argumentos favorables a la propuesta.¹⁵ Igualmente hay que señalar que, en todos los casos, estos actores proponían una dolarización unilateral, sin respaldo del tesoro norteamericano. Pero la mayor reactivación de la disputa se desató hacia fines de mayo, cuando el propio presidente del BCRA hizo público un detallado plan de dolarización, señalando sus principales ventajas: imposibilidad de modificación unilateral de la política monetaria y cambiaria; eliminación del riesgo cambiario; disminución de la tasa de interés doméstica; impacto positivo sobre el monto total de la deuda externa; aumento de la inversión, y crecimiento y estabilidad del sector bancario y financiero local. Obviamente, esta mirada preveía que la dolarización, al eliminar

afirmar que, de adoptar el dólar como moneda, “Menem estaría firmando el fin del Mercosur y echando a perder años de esfuerzo para el fortalecimiento de la economía regional” (Clarín, 24-01-99).

¹⁴ Clarín, 23-01-09.

¹⁵ Entre los principales defensores se encontraba el ex jefe de la Reserva Federal, Paul Volker. Por el contrario, el entonces director del FMI, Michel Camdessus, se manifestó de entrada en contra de la propuesta.

por completo la incertidumbre cambiaría, iba a tener un impacto positivo sobre la productividad, el salario real y el crecimiento.¹⁶

Este pronunciamiento por parte de un hombre clave del gobierno desató una fuerte oleada de críticas provenientes de los más diversos sectores del espectro local y extranjero. Los políticos, se abocaron a criticar la pérdida de soberanía que implicaría perder el control de la política monetaria; los economistas, se centraron en cuestionar los efectos positivos señalados por Pou, advirtiendo que era difícil pensar que se pudiera incrementar la “confianza de los mercados” cuando los indicadores básicos de la economía real presentaban derroteros tan negativos. En definitiva, hacia fines de año, la dolarización sólo era propiciada por el gobierno y algunos economistas ortodoxos; el resto de los actores sociales relevantes, se manifestaron públicamente en contra de la propuesta.

Tras el triunfo de la Alianza, la discusión pública sobre la crisis del modelo económico pasó (al menos en lo inmediato) a un segundo plano. En materia económica, el nuevo elenco gubernamental mantuvo su discurso de campaña: “un peso igual un dólar”. Durante todo el año 2000 la dolarización fue defendida públicamente sólo por, el ahora ex presidente, Carlos Menem, que insistía con la idea del “*shock* de confianza” que podía generar la medida y la posibilidad de disminuir el costo del capital al eliminar el riesgo cambiario.

Sin embargo, a pesar de que no tuvo la misma presencia mediática que en el '99, la discusión sobre esta propuesta se reactivó a mediados de febrero del 2000, cuando un miembro del gabinete económico de Machinea, viajó a los EE.UU. para asistir a un seminario organizado por el FMI en el que se discutieron los pros y los contras de la dolarización, generando crispadas críticas, incluso desde el propio

¹⁶ Documento publicado en el diario Clarín el 26 de mayo de 1999.

seno del gobierno.¹⁷ Esta misma disputa volvió al ruedo en el último semestre del año, cuando se generaron dos nuevos frentes de conflicto en torno a la dolarización: por el lado externo, se produjo un enfrentamiento entre el poder ejecutivo estadounidense (encabezado por Bill Clinton) y el Congreso de ese mismo país, por la presentación de un proyecto de ley realizada por el titular del Comité Económico Conjunto del Congreso, incitando a varios países subdesarrollados a adoptar el dólar como moneda oficial;¹⁸ por el lado interno, se instaló en el propio partido de gobierno una disputa en torno a las implicancias presentes y futuras de la convertibilidad, ante la feroz crítica que, sobre esta política, realizara el dirigente Raúl Alfonsín.

En efecto, como principal contrargumento ante la alternativa dolarizadora, el ex presidente planteó que, de ponerse en práctica esta medida, se cristalizarían y profundizarían los notables perjuicios generados por el modelo convertible.

Textualmente, sostuvo en público que, el plan aplicado en 1991, fue “el episodio más grave del siglo para la economía de la Argentina”¹⁹ marcando un hito en la estrategia de acción comunicativa de los opositores a la dolarización: por primera vez, los actores tradicionales comenzaron a romper el férreo consenso creado en torno a la convertibilidad, criticándola abiertamente y manifestando, por elevación, su abierta oposición a la propuesta de los dolarizadores. Estas declaraciones obligaron a los principales funcionarios de gobierno a salir en defensa de la Ley de Convertibilidad (a la que consideraban la “piedra angular” de la gestión económica) y marcaron el inicio de una larga zaga de desencuentros entre los

¹⁷ Hasta el propio Machinea se manifestó públicamente en contra de la dolarización, utilizando argumentos de carácter técnico, como el incremento del costo fiscal. Ver al respecto, sus declaraciones publicadas en el diario Clarín del 12 de junio de ese año.

¹⁸ Este proyecto de ley excluía la supervisión de los EE.UU. sobre los bancos residentes en otros países y dejaba en claro que la Fed no tendría obligación alguna de actuar como prestamista de último recurso de un sistema bancario extranjero. Al respecto, consultar Clarín, 26-07-2000.

¹⁹ Clarín, 13-10-2000

miembros de la alianza gobernante, que llegó a su punto más alto en octubre del año 2000, cuando renunció el vicepresidente Carlos Alvarez.²⁰

Durante el año 2001, la estrategia dolarizadora adquirió un notable impulso; pero esta vez, a diferencia de la anterior, la alianza social que la motorizaba incorporó nuevos actores. Ante la agudización de la crisis y la certeza de que se estaba perdiendo toda base de sustentación, la propuesta de la dolarización volvió a la palestra como un intento de mostrar la firme convicción del gobierno de llevar al extremo la convertibilidad antes que pagar el alto costo político que implicaría eliminarla. En efecto, a pesar de que su implementación era prácticamente imposible, la dolarización fue utilizada como un mecanismo de generación de confianza en un contexto de alta incertidumbre con respecto al sostenimiento de la pauta cambiaria.

Además de los tradicionales impulsores, a partir de octubre se sumaron varios funcionarios que anteriormente se habían pronunciado en contra, como el propio presidente De la Rúa.²¹ De esta forma, la alianza pro dolarización quedó constituida por los economistas más ortodoxos (el destituido Pedro Pou y el ex ministro Roque Fernández), algunos funcionarios de gobierno (Chrystian Colombo, Nicolás Gallo y Fernando de Santibáñez), el presidente Fernando de la Rúa y el ex presidente Carlos Menem. El flamante ministro y “padre de la criatura”, Domingo Cavallo, alternó entre una defensa acérrima de la Convertibilidad, una propuesta de flexibilización cambiaria más cercana a una devaluación encubierta (la famosa “canasta de monedas”) y la adopción de la dolarización como una alternativa extrema ante una posible devaluación.²²

²⁰ El principal vocero de esta cruzada fue el entonces Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.

²¹ El 5 de octubre el gobierno reconoce públicamente por primera vez, la posibilidad de dolarizar la economía.

²² Los vaivenes del ministro en esta materia fueron notables: en sólo cinco días se dijo y se desdijo con respecto a la dolarización. Mientras el 8 de octubre aseguraba que “la dolarización es una posibilidad que siempre estuvo contemplada en la Ley de Convertibilidad” el 13 descartaba la idea afirmando que la

Del otro lado, el arco opositor a la ofensiva dolarizadora involucraba a varias corporaciones empresarias lideradas por la UIA y aglutinadas en el Grupo Productivo, la CGT disidente encabezada por Hugo Moyano, los principales líderes del PJ bonaerense (entre los que se destacaban Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf) y varios dirigentes de la UCR (Ángel Rozas, Leopoldo Moreau y Rodríguez Giavarini).

Por otra parte, y sin alinearse conjuntamente con los actores mencionados debido a profundas divergencias ideológicas, se encontraban los economistas heterodoxos del novel Grupo Fénix y la central sindical opositora liderada por Víctor De Gennaro (CTA) que fueron los primeros en advertir públicamente sobre los peligros que implicaba adoptar los parámetros de discusión propuestos por los sectores dominantes para debatir públicamente la crisis del modelo.

Los sucesos del 19 y 20 de diciembre marcaron el final de la estrategia. Hasta mediados de diciembre se realizaron álgidas gestiones, tanto en Argentina como en los EE.UU., para tratar de evitar una (a esa altura inevitable) devaluación. Pero a esa altura de los acontecimientos, la alternativa dolarizadora era más un último recurso para recobrar la confianza perdida que una decisión de política económica mínimamente viable. Ni sus más acérrimos defensores creían que se podía llevar a la práctica. Fue entonces cuando los partidarios de una devaluación supieron que el camino quedaba despejado, el Consenso de la Convertibilidad estaba herido de muerte y la corrección del tipo de cambio se iba presentando, a los ojos de la mayor parte de la sociedad, como un hecho inevitable.

Convertibilidad permitió “volver a tener una moneda argentina fuerte aunque deberá seguir respaldada por el dólar y más adelante por el euro y así será por muchos años” (ambas declaraciones fueron reproducidas en el diario Clarín).

1.2 La estrategia devaluacionista: cómo hablar de devaluación sin nombrarla

A diferencia de lo que sucedía con las argumentaciones explícitas desarrolladas por los partidarios de la dolarización, los actores que impulsaron una devaluación tuvieron que fundar sus argumentos y proponer sus soluciones con la mayor cautela posible. De esta forma, el proyecto devaluatorio se transformó en un proyecto *encriptado*, en el cual los actores involucrados dieron largos rodeos para evitar el reconocimiento público de que sus propuestas para superar la crisis llevaban inevitablemente a una devaluación.

En efecto, la vigencia de un consenso favorable a la paridad fija y a la convertibilidad monetaria, que se recostaba en los “éxitos” iniciales del modelo, hacía que, para los actores interesados en una modificación de la pauta cambiaria, la explicitación de su proyecto fuera harto dificultosa; para remar contra la corriente del “sentido común económico” era necesario construir otro contrasentido que diera cuenta de la explicación de la crisis y a su vez presentara la propuesta devaluatoria como la alternativa más beneficiosa para el conjunto social.

A comienzos del año 1999, la UIA y la Cámara Argentina de Exportadores se unieron en un pedido de “medidas compensatorias” para paliar las consecuencias generadas por la devaluación de la moneda de Brasil. A esas voces corporativas, se le sumaron las de algunas figuras clave del ámbito empresarial como, por ejemplo, Javier Tizado, un reconocido hombre del Grupo Techint que, durante la gestión de la Alianza, se desempeñó como Secretario de Industria.

Básicamente, los pedidos de entonces pasaron por la aplicación de rebajas arancelarias, impositivas y la eliminación de los subsidios financieros a los productos originarios del país vecino. En todo momento, los actores se ocuparon

de destacar su respaldo irrestricto a la paridad uno a uno, pero argumentaron que era inevitable “mejorar el tipo de cambio de las exportaciones fabriles” para poder competir con Brasil y evitar la “avalancha importadora”.²³ Estos reclamos lograron el apoyo de varios hombres del espectro político, entre los que se desatacaron Raúl Alfonsín, Carlos Ruckauf y Ramón Ortega. Pero, sin lugar a dudas, fue la UIA la principal promotora de las medidas mencionadas. Por otra parte, cabe señalar que, en esta etapa inicial, primaron los *argumentos encubiertos* más que los pedidos explícitos de devaluación.²⁴

Los que veían en estos reclamos un peligro en ciernes sobre la política cambiaria, también movilizaron rápidamente sus recursos y salieron al ruedo para contrarrestar la “encubierta” ofensiva devaluatoria. Los economistas jefe de los principales bancos se dedicaron a señalar en diversos medios gráficos que la devaluación sería “un golpe terrible para las empresas, bancos y el gobierno, que están muy endeudados en dólares” y aún más, vaticinaban una “transición complicada” si el gobierno se hacía eco de los reclamos de los industriales.²⁵

Luego de esta primera etapa, en la cual el proyecto devaluador fue sostenido por las corporaciones empresarias representativas de los sectores industrial-exportadores mediante la utilización de estrategias discursivas veladas; el proyecto adquirió un nuevo curso al incorporar un nuevo aliado que terminaría resultando estratégico: las corporaciones sindicales. En efecto, a comienzos del año 2000, los principales líderes sindicales instalaron públicamente dos elementos relevantes para la construcción de la estrategia devaluacionista.

En principio, el secretario de la CGT oficial, Rodolfo Daer, expresó la necesidad de constituir una alianza policlasista para impulsar una alternativa a la crisis; en

²³ Clarín, 17-01-99

²⁴ Sobre el rol de la UIA en todo este período, consultar Gaggero y Wainer, op.cit.

²⁵ Declaraciones de Arturo Porzecansky del ING Baring en una nota publicada en Clarín el 22 de mayo de 1999.

sus propios términos: armar un “gran acuerdo nacional que otorgue más competitividad aún con esta paridad, pero tocando a los sectores beneficiados estos años: en finanzas, en sectores privatizados, en la energía, los peajes... todos los que llevan el dinero que ganan aquí”. Esta construcción pública del adversario permitió consolidar lentamente la noción de un *nosotros* compuesto por los “sectores nacionales de la producción y el trabajo” y un *ellos* formado por “intereses especulativos” (y, por ende, improductivos) y “foráneos”. La utilización de estos *ideologemas*, permitió marcar una impronta “nacional” destinada a la “defensa del interés general” y, de esta forma, se facilitó la articulación de una alianza devaluacionista que incorporó a diversos actores sociales.

Un segundo elemento fundamental, lo constituye el hecho de que la corporación sindical fue la primera en pronunciarse abiertamente por una devaluación, comenzando a resquebrajar las bases del consenso social construido en torno a la convertibilidad. En efecto, fue de boca del propio secretario de la CGT disidente, Hugo Moyano, que se escuchó por primera vez, durante el período en cuestión, un pedido expreso de devaluación que marcó un cambio en la estrategia discursiva: de la utilización exclusiva de los denominados *argumentos encubiertos* (propiciados especialmente por las corporaciones del capital) se pasó a una combinación de esos mismos argumentos con otros *abiertamente favorables* a la devaluación (exclusivamente a cargo de los sindicalistas).²⁶ En este sentido, es posible afirmar que los sindicalistas actuaron como “perros de caza” azuzando los viejos fantasmas del pasado que nadie quería volver a ver, mientras los líderes de las corporaciones empresarias bregaban por una devaluación utilizando eufemismos varios como el de la búsqueda de “mayor competitividad” de la economía

²⁶ Clarín, 18-01-00

A su vez, este cambio en la estrategia discursiva de la alianza devaluacionista, generó un reforzamiento de la estrategia discursiva de los opositores. En efecto, sin adherir necesariamente a la alternativa dolarizadora, casi la totalidad del espectro político convalidó públicamente la vigencia de la convertibilidad. Sin embargo, desde el único lugar que se denunció la intencionalidad encubierta puesta en marcha por las corporaciones empresarias fue desde la principal central sindical opositora: la CTA.²⁷

Pero sin lugar a dudas el escenario de mayor despliegue de la estrategia devaluacionista fue el que se realizó entre marzo y diciembre del 2001. En efecto, con la llegada de Cavallo al gobierno, y en un contexto cada vez más crítico en materia económica, se puso en marcha el Plan de Competitividad. Con esta medida, el gobierno se hacía cargo de la demanda de los exportadores y esperaba mejorar levemente el tipo de cambio para incrementar el nivel de competitividad. Inmediatamente, el exponente máximo de la estrategia dolarizadora, Carlos Menem, instaló públicamente la “inminencia de una devaluación” instando a todos los argentinos endeudados que compraran dólares para protegerse y evitar “tener que pagar sus créditos con una moneda devaluada”.²⁸ Paralelamente, en el frente externo comenzaron las presiones de los organismos internacionales para que se realizara una devaluación de la moneda seguida de una reestructuración de la deuda externa.

De esta forma, la ofensiva pública contra la convertibilidad estuvo a cargo de la alianza integrada por las corporaciones empresarias (en especial la UIA); las corporaciones sindicales (excluyendo la CTA); y algunos líderes políticos destacados (especialmente, Alfonsín). Todo esto, en un contexto en donde los

²⁷ Las declaraciones del economista Claudio Lozano relevadas en Clarín del 18 de enero del 2000 confirman esta afirmación.

²⁸ Declaraciones de Carlos Menem publicadas en el diario Clarín del día 21 de abril del 2001.

principales organismos acreedores comenzaban a mostrar evidentes fisuras en torno a qué hacer con la crisis argentina.

Por otro lado, el arco de apoyos al modelo quedó compuesto, casi exclusivamente, por los miembros del gobierno nacional, en especial el presidente y su ministro de economía. La estrategia discursiva de estos actores se sostuvo en la utilización de *argumentos alarmistas* referidos al “caos”, al “salto al vacío”, al “desastre” que podría sobrevenir a una devaluación.

Ahora bien, cuando en octubre se desató la primera corrida significativa contra el peso, el gobierno responsabilizó públicamente, sólo a las empresas extranjeras, contribuyendo a reforzar el falso dilema nacional/extranjero con que los devaluacionistas intentaron granjearse el apoyo social. Al mismo tiempo, la UIA volvió a pedir más medidas compensatorias ante la pérdida de competitividad de la economía, sin animarse aún a solicitar explícitamente una devaluación.

Finalmente, en diciembre del 2001 (y ante la debacle inminente del régimen), la disputa por la crisis del modelo se agudizó en el interior del FMI entre aquellos que pedían la devaluación y aquellos que defendían la propuesta dolarizadora. Incluso, se llegó a plantear que se implementaran conjuntamente, es decir dolarizar luego de devaluar. Cuando la fracción encabezada por Anne Krueger (partidaria de una devaluación) logró imponer su visión en el organismo de crédito, el camino para la ofensiva devaluacionista quedó allanado.

En un último intento por impedir la salida de la convertibilidad, se formó una transitoria alianza entre el ex presidente Menem y varios de los principales hombres del gobierno, incluyendo al presidente De la Rúa, que se reunieron para analizar la posibilidad de implementar una dolarización unilateral de la economía. Pero a mediados de diciembre los tiempos se aceleraron vertiginosamente, y tras la caída del gobierno, la ofensiva devaluatoria no tuvo límites: amplió sus

alianzas, utilizó argumentos abiertos en favor de una devaluación, e incorporó públicamente a su propuesta, el pedido de pesificación de las deudas contraídas en dólares. El Grupo Productivo, varias de las corporaciones empresarias tradicionales (UIA, la Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de PyMes del sector alimenticio, la Cámara Argentina de la Construcción), algunos grupos económicos (en especial el grupo Techint) y diversos líderes políticos del PJ y la UCR constituyeron un consolidado frente pro devaluacionista. Para frenar la ofensiva, sólo quedaron algunas empresas extranjeras y los cuerpos diplomáticos de sus países de origen, que reclamaron ante los nuevos gobiernos que vertiginosamente se sucedieron desde el 20 de diciembre.²⁹

Cuando el fin de la convertibilidad fue un hecho consumado, la cruzada de la alianza devaluacionista se centró en la pelea por la pesificación de todas las deudas, medida que se implementó a comienzos del mes de febrero y que implicó que los sectores exportadores no sólo se vieran beneficiados por la modificación del tipo de cambio sino también por la licuación de sus pasivos internos.³⁰ De esta forma se cerraba el ciclo iniciado en 1999. En efecto, desde ese año, la estrategia devaluacionista presentó tres etapas bien diferenciadas: la primera, encabezada por los actores económicos corporativos, se caracterizó por la utilización de argumentos encubiertos centrados en la “mejora de la competitividad” y en la defensa de la “industria nacional”; durante la segunda, que se inició a comienzos del año 2000, se incorporaron dos de las tres centrales sindicales (ampliando las bases de sustentación social de la propuesta), pero además se utilizaron por

²⁹ Según los principales medios gráficos, se trataba de las empresas de servicios Repsol-YPF, Aguas de Barcelona, Gas Natural, Telefónica, Edesur, Dycasa, Acesa (Acceso Oeste), Mafpre Aconcagua y Prosegur y los bancos BB.VV-Francés y Río Santander. Al respecto ver Clarín y La Nación del 28-12-01

³⁰ La ofensiva fue encabezada por la UIA y acompañada por la CGE, la CAME y otras corporaciones de segundo grado del sector industrial

primera vez, argumentos abiertamente favorables a la devaluación articulando el discurso en torno a la defensa del “trabajo y de la producción” en contra de la “usura y la especulación financiera”; finalmente, la tercera, que se desplegó a mediados del 2001, se caracterizó, por un lado, por la agudización de los reclamos previos y la incorporación de otros nuevos como al pesificación de las deudas; y por otro, por la inclusión de nuevos actores provenientes del espectro político (pertenecientes a los dos grandes partidos tradicionales) que apoyaron la implementación de ambas propuestas, y que al ocupar cargos en los sucesivos gobiernos, fueron los responsables de poner en marcha las medidas propuestas por la alianza devaluacionista. Fue precisamente en esta última etapa en donde se registra el principal triunfo de sus promotores: la interpretación social de la devaluación como un “hecho natural e inevitable” y no como un hecho social construido al calor de las luchas intestinas registradas en el interior de la clase económicamente dominante. Este nuevo artilugio simbólico construido mediáticamente, permitió ocultar a los verdaderos promotores y beneficiarios de una inaudita traslación de ingresos en perjuicio de la mayor parte de la población, generada tras la devaluación y pesificación de la economía.

II- El posicionamiento de los principales actores a lo largo de la crisis

Es factible suponer que, en el convulsionado escenario que enfrentó la Argentina entre los años 1999 y comienzos del 2002, los diversos actores que intervinieron en la construcción de las alternativas devaluacionista y dolarizadora adaptasen sus argumentos a los vaivenes propios del contexto social, político y económico imperante, tratando de construir el máximo consenso posible para consolidar socialmente su propuesta. Sin embargo, el análisis diacrónico de los

posicionamientos públicos y de las estrategias argumentativas que se desplegaron en cada caso, tendieron a permanecer, al menos en líneas generales, relativamente estables en el tiempo. En efecto, no fue sino hasta la crisis terminal del esquema de paridad cambiaria fija que se produjeron modificaciones parciales entre quienes apoyaban o rechazaban alguna de las medidas propuestas. Precisamente, a continuación se presenta un somero análisis de estos posicionamientos y estrategias discursivas llevadas adelante por los actores involucrados en la construcción de las distintas alternativas tratando de explicar las causas que podrían dar cuenta de cada uno de estos particulares derroteros.

II.1. La Corporación Política

Sin lugar a dudas la corporación política (entendida como el conjunto de funcionarios de gobierno y dirigentes de los principales partidos políticos), jugó un rol central en la construcción social de la dos alternativas elaboradas por los sectores económicamente dominantes para superar la crisis del modelo.

Obviamente, su posicionamiento no fue unívoco ni homogéneo, por el contrario, se presentaron profundas divergencias en torno a las propuestas a seguir ante la crisis, no sólo entre los diversos partidos sino, fundamentalmente, dentro de cada uno de los partidos y de los distintos gobiernos que se sucedieron a lo largo del período.

Carlos Menem, quien le disputaba a Cavallo la “paternidad del modelo”, fue quien adoptó tempranamente la idea de la dolarización como “superación lógica” de la convertibilidad, defendiendo dicha propuesta hasta que su camino se cerrara definitivamente cuando la devaluación se produjo, a comienzos del año 2002. En

múltiples y reiteradas declaraciones, Menem advirtió públicamente respecto del caos que sobrevendría de abandonarse la relación del “uno a uno”, blandiendo ante la sociedad en general, y los sectores populares en particular, el fantasma de un pasado hiperinflacionario, de desasosiego y sin sentido social, el cual había conjurado durante los primeros años de su década en la presidencia.

Sin que su estrategia pueda dissociarse de la estrategia argumentativa de los sectores interesados en que la devaluación no se produjera (sector financiero y empresas privatizadas), cabe la suposición por los fines políticos perseguidos por el ex-presidente. En este sentido, y ante la intensificación de la crisis estructural a partir del estancamiento de la economía en 1998, Menem buscó reposicionarse como el único dirigente capaz de tomar el timón de la nación, y de recrear una hegemonía como la detentada durante el extenso periodo que abarcó su mandato. La apelación a la posibilidad de una devaluación habría operado entonces como su estrategia personal para mostrarse como la opción excluyente ante el inevitable caos preanunciado en la crisis del modelo de convertibilidad. Sólo Menem aseguraría que los “logros” alcanzados durante su gestión pudieran extenderse en el tiempo, y que los beneficios de un eventual nuevo ciclo de crecimiento económico abarcaran a una mayor proporción de la población.

En suma, plenamente consciente del peso social de la *inflación cero*, Menem advertía sobre la posibilidad de que esa realidad se diera de bruces contra el piso en un escenario post devaluatorio. Esa posibilidad constituía la antítesis del proyecto por él defendido –la dolarización–, el único que habría de garantizar a los sectores menos favorecidos de la población el resguardo de sus ingresos y sus ahorros.

Contrariamente a la línea seguida por Menem, la posición pública adoptada por el dos veces ministro de economía, Domingo Cavallo osciló entre el eclecticismo

componedor entre intereses divergentes y la condena abyecta a la posibilidad del cambio o la modificación del régimen monetario por él instaurado. Sabedor de que su futuro político se hallaba indisolublemente ligado al esquema implementado durante su primera gestión, su posición promedio tendió a ubicarse en la negativa a la devaluación. Para él eran otros los caminos a seguir para que la economía recuperase competitividad internacional. Su estrategia, como ministro durante el corto gobierno de la Alianza, pareció consistir en intentar ganar tiempo a la espera de que se revirtiese, en el corto o mediano plazo, el adverso escenario crediticio internacional, permitiendo así que el modelo económico sostenido en el endeudamiento indefinido y en la lógica de la valorización financiera recobrase los bríos perdidos. Componer intereses poco compatibles entre sí, compensar pérdidas, a la vez que se ajustaba el gasto público y se promovía la reducción global de los salarios, eran la manifestación de ese intento por ganar la carrera contra el tiempo. De aquí se desprende que su derrotero argumental haya tomado múltiples y complejas facetas, a excepción del reclamo abierto de una devaluación. A días de presentar su renuncia, Cavallo aceptó la posibilidad de dolarizar la economía, aunque sólo admitiese dicha propuesta como recurso extremo para salvaguardar los destinos del Plan de Convertibilidad.

Por su parte, una vez que la principal alianza opositora al gobierno de Carlos Menem (la coalición UCR-FREPASO) llegó al poder en diciembre de 1999, leyó en la recesión y la crisis económica vigente desde hacía más de un año, no el agotamiento de un modelo en sí, sino el de una forma de hacer política que la *Alianza con la gente* venía a cambiar mediante una gestión esencialmente fundada en la transparencia de los actos de gobierno y en una administración “correcta” de la cosa pública. Con ello habrían de corregirse las irregularidades que durante la presidencia de Menem se habían introducido en el sistema de

poder. Lo que sí quedaba en claro, era que el modelo de la convertibilidad no sería puesto en cuestión por un presidente –Fernando De la Rúa- que había ganado las elecciones prometiendo, contra toda duda, que “conmigo un peso, un dólar”. Pero a la par que se proponía una gestión más prolija y ajustada a la legalidad, del nuevo gobierno se esperaba –aunque no estaba muy claro cómo- que hallase un camino que condujera hacia el crecimiento. Tras tres ministros de economía, sucesivos ajustes, recortes salariales y confiscación de depósitos bancarios, esa posibilidad quedó definitivamente descartada.

En la estrategia argumentativa de la Alianza, una devaluación nunca pareció constituir una posibilidad cierta. Detrás de la proposición *Alianza con la gente* quedaba encubierto el fundamento real de la acción de gobierno, que era la defensa de los intereses de los sectores beneficiados por el esquema de la convertibilidad. Las declaraciones, tanto del presidente De la Rúa como de los funcionarios de gobierno, parecían operar en tal sentido, colocando recurrentemente a los dicentes en la vereda opuesta de cualquier proyecto que contara con una devaluación entre sus supuestos básicos. Ello no significa que aún dentro de la Alianza no hayan habido voces que se manifestaran en franco disenso frente a la posición oficial. El ex presidente Raúl Alfonsín (así como un importante sector dentro de la UCR) se opuso a la posibilidad de dolarizar la economía, a la vez que intercedía en nombre de los sectores de la producción, cuyo proyecto político oscilaba entre la exigencia de medidas compensatorias y la devaluación abierta con pesificación de las deudas.

En suma, lo que demostró la Alianza en el gobierno fue una constancia en estrechar filas sobre la convertibilidad, y en el momento de su crisis terminal, en la posibilidad de aceptar la dolarización de la economía argentina, manifestándose

de esa forma, y de manera abrupta, el carácter sectorial de su gestión de gobierno.

Finalmente, el Partido Justicialista que había jugado un papel central en la consolidación de la Convertibilidad y de las reformas estructurales que la precedieron, fue el que presentó mayores fisuras en su interior en torno a los dos proyectos alternativos impulsados por los sectores económicamente dominantes. Como la mayoría de los actores sociales, el Justicialismo en conjunto se encolumnó en torno a la defensa irrestricta del modelo de la convertibilidad, aún cuando éste mostrara manifiestos signos de agotamiento. Pero dentro de ese consenso general se formaron dos fracciones bien diferenciadas: aquella liderada por Carlos Menem, principal impulsor de la dolarización; y aquella encabezada por los principales dirigentes bonaerenses, cada vez más permeable a adoptar los el discurso de los actores representantes de los sectores productivos. En efecto, si bien en conjunto el PJ y su candidato presidencial a las elecciones generales del '99, estrecharon filas en torno a la defensa de la convertibilidad, a su vez exigieron (o prometieron hacer efectivas una vez asumido el poder) medidas que compensaran los perjudiciales efectos que el *uno a uno* acarrearía a los sectores productivos. Se trataba de mantener la convertibilidad, pero impulsando una *Concertación Social* mediante la cual se recreara una alianza de clases de carácter populista.

En un comportamiento análogo al de los actores de la producción, el Justicialismo no se declaró públicamente en favor de una devaluación hasta que los tiempos de la política y la economía se aceleraron de manera dramática en diciembre de 2001. Antes de esa fecha, las declaraciones públicas provenientes de este sector apuntaron a condenar las políticas neoliberales que el propio partido había

impulsado y sostenido durante una década, y que hallaron continuidad en el gobierno de la Alianza.

Puesto por obra del voto popular en el rol de principal opositor, el Justicialismo cambió su discurso adaptándolo a las circunstancias reales, en tanto ello le asegurara la posibilidad de reconstruir su poder. Tras un interregno de dos años, el Justicialismo retomó el control del poder del Estado, mediante una estrategia que le permitió recuperar gradualmente espacios, y que poco tenía que ver con la legitimación electoral. Finalmente, el partido se montó sobre un poder que se había volatilizado en manos de la Alianza. Fue la fracción bonaerense –la más poderosa del justicialismo- la que casi inmediatamente después de reasumir el control del Poder Ejecutivo, trajo nuevamente a la vida aquel *hecho maldito*, agitado como un fantasma por los militantes activos de la convertibilidad y la dolarización: la devaluación de la moneda en un inicial 40%.

II.2 Las corporaciones empresarias representativas de los “sectores de la producción”

Los sectores de la producción nucleados en un conjunto de asociaciones y corporaciones que hacia el año 2001 se articularon en el denominado “Grupo Productivo” presentaron tempranamente batalla a la continuidad del esquema de la convertibilidad y, específicamente, al intento de avance hacia su denominada “fase superior” –la dolarización.

Como se señaló precedentemente, una eventual suba en el precio del dólar produciría sobre esta fracción del poder económico un doble efecto: por un lado abarataría internacionalmente el costo de la mano de obra, incrementando

consecuentemente la competitividad sin que se hubieran registrado aumentos en la productividad del trabajo; por otro lado, impulsaría el proceso industrial sustitutivo por el encarecimiento del precio de los bienes producidos en el exterior, aumentando de esta forma la demanda interna de los bienes de producción nacional. Pero a su vez, y como conflictiva contraparte, una devaluación encarecería los costos financieros a afrontar por las empresas que se encontraran endeudadas en dólares, sea con la banca local o exterior. Es por ello que para los actores corporativos representativos del ámbito de la producción, la devaluación se planteaba como un dilema de difícil resolución, al menos hasta que el reclamo por la pesificación de las deudas contraídas en dólares en el mercado local, comenzó a generalizarse.

Es en esta clave que debe entenderse la estrategia argumentativa de estos actores. Ahorcados por una política que si bien, de una parte, había logrado controlar la inflación, pero por otro lado había abierto el comercio dejando a la industria a merced de la competencia internacional en desigualdad de condiciones, las corporaciones empresarias que defendían los intereses de los autodenominados “sectores productivos” debieron moverse políticamente con la mayor cautela, al menos mientras el consenso social en torno al régimen de convertibilidad se mantuviera en vigencia. Esa cautela se plasmó en las propuestas acercadas al poder político para recuperar los márgenes de ganancia previos a la crisis brasileña, a partir de medidas compensatorias -eufemismo utilizado para exigir políticas con efectos equivalentes a una devaluación- pero sin devaluar el peso.

En la devaluación de comienzos de 2002, y en la incorporación de altos cuadros provenientes de las corporaciones productivas en el gabinete del gobierno provisional de Eduardo Duhalde, así como en la posterior pesificación de las

deudas con el sistema financiero local, puede leerse el triunfo político de esta fracción del empresariado local.

II.3 Las corporaciones sindicales

El análisis del posicionamiento y las estrategias adoptadas por las corporaciones sindicales resulta de crucial importancia ya que, en términos estructurales, la clase trabajadora a la que supuestamente representaban estas corporaciones, era la principal perjudicada ante la implementación de cualquiera de las propuestas alternativas que se barajaban ante la crisis de la convertibilidad. La dolarización “congelaría” la profundamente regresiva estructura distributiva consolidada al calor de la convertibilidad y el cada vez más deteriorado mercado laboral. Por su parte, una hipotética devaluación tendría como efecto inmediato la caída del salario real, la cual resultaría difícilmente morigerable mediante la acción sindical y la lucha política, dada la existencia de un sobreextendido ejército de mano de obra desocupada, cuya constante presión sobre el mercado laboral habría conducido al salario a la baja.

De acuerdo a esta lectura, era factible suponer que la posición de la corporación sindical fuera de oposición a ambas alternativas, ya que atentaban directamente contra los intereses de sus representados.

Pero no fue ese el lugar en el cual se posicionaron las dos principales centrales sindicales. Más bien, la postura de las mismas tendió a coincidir con la que venían sosteniendo las corporaciones empresarias “de la producción,” con la diferencia de que la argumentación sindical tuvo un carácter menos encubierto y más explícito. Exigir una devaluación abierta en un momento en el que no existía aún

un consenso social favorable a la medida, equivalía a comportarse como un *perro de caza* frente a una presa. Los argumentos latentes correspondientes a la estrategia de los actores de la producción, se hacían manifiestos y públicos en boca de líderes sindicales que parecían actuar más por delegación que por convicción. El porqué de esa exigencia sindical contraria a los intereses de la mayoría de sus representados, es una incógnita que el presente trabajo no pretende dilucidar. Lo que sí resulta evidente es que los actores sindicales siguieron el juego de intereses de los empresarios afiliados a las corporaciones productivas.

Consideraciones finales

Como se expresó en la Introducción, si bien es cierto que la devaluación, la incorporación de altos cuadros provenientes de las corporaciones productivas en el gabinete del gobierno provisional de Eduardo Duhalde, y la pesificación de las deudas con el sistema financiero local, pueden leerse como el triunfo político de la alianza devaluacionista, cabe aclarar que dicho triunfo se asentó sobre un sólido sustrato que va más allá de la voluntad de los actores. En este sentido, los resultados presentados en esta oportunidad no pretenden sostener *visiones conspirativas* de la historia sino más bien contribuir al análisis de la compleja articulación entre las condiciones estructurales que definen un determinado contexto y las acciones sociales que aún en el marco de esas limitaciones, permiten la realización de cambios significativos.

En este sentido es posible afirmar que para que se produjera la devaluación, debieron madurar una serie de condiciones. Objetivamente, era necesario que el

régimen de convertibilidad se agotara por su propia lógica; un modelo basado en el endeudamiento y en el ingreso permanente de capitales del exterior, seducidos por la garantía de valorización que les presentaba el Estado, no podría conseguir la perpetuación en el tiempo de no contar con el “combustible necesario”. La exigencia de contracción del gasto público y de reducción permanente de los costos laborales, dieron cuenta del naufragio objetivo del esquema convertible. Pero como contraparte simbólica, fue necesario que el Consenso de la Convertibilidad, compartido por amplios y heterogéneos sectores sociales, se desgranara y perdiera vigencia; esta última condición “subjetiva” fue la de más lenta maduración, dado el arraigo que en la población tenía el hecho de la estabilidad relativa de los precios y la ilusión generada por un dólar por debajo de su valor real.

Sobre el antiguo consenso fue solapándose uno nuevo, sostenido sobre la idea de que, durante la primera mitad de los años noventa, el ingreso masivo de capitales no habría servido para potenciar la generación de riquezas, sino más bien para enajenarlas y extraerlas del ámbito nacional. La promesa de que el remate y posterior venta del patrimonio social acumulado durante décadas permitiría la expansión de la economía sobre las bases de la sobreabundancia de liquidez y la introducción de cánones de modernidad, se demostró falsa o incumplida. La “plata dulce” producto del proceso de privatización y del ciclo de endeudamiento no se “derramó” sobre la porción mayoritaria de la sociedad, sino que contribuyó a su progresivo empobrecimiento.

Por más elaborada que pudiera parecer una acción estratégica manifestada en un cúmulo de argumentaciones, ésta naufragaría si el estratega desconociera sus propias determinaciones, es decir, las condiciones objetivas y subjetivas del contexto. En este sentido, la voluntad no resulta suficiente Y quienes bregaban

por una devaluación parecían así entenderlo. El principal triunfo de esta fracción social se encuentra entonces en el hecho de haber logrado presentar su interés particular como el interés general de la sociedad, y en haber actuado pacientemente a la espera de que se produjera el contexto propicio para imponer una devaluación.

Por otro lado, quienes contribuyeron a la construcción del discurso pro-dolarización aparentaron desconocer las determinaciones que la realidad imponía. Pero el desconocimiento no implicaba ingenuidad. Así, la estrategia dolarizadora no parecía obedecer a otra cosa más que a intentar sostener un régimen de paridad fija más allá de sus fronteras objetivas, y con éste, a sus principales beneficiarios: el sector bancario y financiero y las empresas privatizadas.

En cualquiera de los dos casos, lo más importante para destacar es el hecho de que las alternativas en torno a la salida de la convertibilidad que se instalaron y discutieron públicamente fueron las diseñadas por las fracciones sociales más beneficiadas por los cambios generados en el funcionamiento económico de la Argentina de los 90. Una vez más, al igual que en la crisis hiperinflacionaria, la lectura e interpretación de los procesos económico-sociales quedó en manos de los sectores dominantes, dificultando así la posibilidad de construir una alternativa viable que permita mejorar las condiciones materiales de vida de la mayor parte de la sociedad.

Bibliografía citada

- Basualdo, Eduardo (1999): *Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*, FLACSO-UNQui/Página 12, Buenos Aires
- Basualdo, Eduardo (2000): *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*. Buenos Aires, FLACSO/IDEP/UNQUI, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo; Lozano, Claudio y Schorr, Martín (2003): “Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la administración Duhalde” en Documentos de Trabajo del IDEF/CTA, Buenos Aires.
- Castellani, Ana y Martín Schorr (2003): “¿Crisis? ¿Qué crisis? Notas sobre la debacle del régimen convertible en la Argentina”, ponencia presentada en las III Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, 16 de diciembre.
- Gaggero, Alejandro y Andrés Wainer (2004): “Crisis de la Convertibilidad: la UIA y el (tipo de) cambio” en Realidad Económica número 204, Buenos Aires, mayo- junio.
- Levit, Cecilia y Ricardo Ortiz (1999): “La hiperinflación argentina: prehistoria de los años noventa”, Revista Época N° 1 (diciembre), Buenos Aires.
- Schorr, Martín (2001): “¿Atrapados sin salida? la crisis de la Convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico”, Área de Economía y Tecnología de la FLACSO-Sede Argentina, octubre, mimeo.

Fuentes consultadas

- Diarios *Clarín* y *La Nación*, período: 1 de enero de 1999 hasta el 31 de enero del 2002
- Revistas *Mercado*, *Prensa Económica* y *Negocios*, período: 1999-2001
- Unión Industrial Argentina (2001): “La visión de la Unión Industrial Argentina sobre las causas de la depresión. Propuestas para el crecimiento”, septiembre.

Proyecto Dolarización

Proyecto Devaluación

Periodización
(según presencia del tema en los medios)

Momentos clave:

Devaluación en Brasil (enero 1999)
Crisis de la convertibilidad (2001)

Momentos clave:

Devaluación en Brasil (enero 1999)
Crisis de la convertibilidad (2001)

Tipo de Actor

Tipo de Actor

		<i>Políticos</i>	<i>Sec. Productivos</i>	<i>Sindicatos</i>	<i>Acreedores/Actores Externos</i>	<i>Políticos</i>	<i>Sec. Productivos</i>	<i>Sindicatos</i>	<i>Acreedores/Actores Externos</i>
Actores	<i>A favor</i>	C. Menem R. Fernandez P. Pou E. Duhalde (inicialmente)				R. Alfonsín E. Duhalde R. Ortega C. Ruckauff	I. de Mendiguren UIA y Grupo Productivo	Sindicalismo no menemista (Hugo Moyano)	FMI (ambiguamente)
	<i>En contra</i>	UCR R. Terragno R. Alfonsín J. Remes Lenicov	UIA y Grupo Productivo I. de Mendiguren	Sindicalismo no menemista CTA	Estados Unidos y el FMI Brasil	Gobierno de la Alianza C. Menem	Empresas extranjeras	CTA	
	<i>Alternativamente a favor y en contra</i>	D. Cavallo Gobierno de la Alianza PJ				D. Cavallo PJ			

Argumentos

- * de carácter técnico
- * de carácter estratégico
- * jurídico-legales
- * efectistas
- * neutrales
- * sociológicos

- * referidos al caos
- * referidos a los costos
- * encubiertos
- * abiertos
- * sin sustento
- * neutros o de suma cero

Fuente: Elaboración propia